

«RIT»

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 10º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-5076-2020
CARATULADO : VALENZUELA/FISCO / CDE

Santiago, veintitrés de Enero de dos mil veintitrés

VISTOS.

Que a folio N° 1, comparece don César Barra Rozas, abogado, en representación convencional de don **Gerardo del Tránsito Valenzuela Valenzuela**, pensionado, ambos domiciliados para estos efectos en calle Blanco N° 1623, oficina 1602, comuna de Valparaíso y Avenida Santa Rosa N° 170, oficina 607, de la comuna de Santiago, quien interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado legalmente por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, domiciliados en Agustinas N° 1687, de la comuna de Santiago, por los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que pasa a exponer.

Refiere que los hechos contados se originaron del relato de su representado quien indica que nació el 14 de enero de 1946 y que durante las primeras horas del 11 de septiembre de 1973, se encontraba junto a unos amigos en la intersección de las calles Andrés Bello con Independencia, en circunstancias que vieron pasar un vehículo con personal de la Marina en dirección hacia la radio Limache, trasladándose a ese lugar, se percató que dichos funcionarios trataban con crueldad al dueño de la emisora, Don Hugo Arellano, obligándolo a entregar las llaves con el fin de ingresar al sector de la antena. Agrega que además fue testigo de que los militares pusieron una carga de explosivos y destruyeron la planta. Agrega que fue tal la impresión del dueño, que este se desmayó, situación que salvó providencialmente, ya que cuando quisieron dispararle, uno de los funcionarios dijo que no era necesario porque ya estaba muerto. Asimismo señala que fue testigo de los disparos dados a Pedro Arellano de 18 años, quien quiso ayudar a su padre.

Explica que aquel día 11 de septiembre estuvo en su casa, pero que el 12 recibió un aviso del jefe de investigaciones de la época, señor Cáceres, quien le recomendó que se alejara de ese lugar toda vez que su vida estaba en peligro atendido que el teniente de carabineros señor Quijada había anunciado que lo buscaría para asesinarlo. Añade que dicha advertencia no podía ignorarla, por lo que conversó con su familia, decidiendo irse a pie junto a su mujer y sus hijos por el cerro hasta el sector de la Quebrada Escobar donde residían sus suegros. Indica que la decisión que tomó en aquella oportunidad lo liberó de ser detenido,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

ya que los carabineros en los días siguientes allanaron su casa, destruyendo sus pocos bienes muebles, molestos por no encontrarlo allí.

Cuenta que llevaba aproximadamente un mes en Quebrada Escobar, cuando por medio de su hermano recibió por parte de los Padres Columbanos el ofrecimiento para salir del país. Señala que el día 22 de octubre concurrió a entrevistarse con ellos para recopilar información sobre la posibilidad de la salida del país, siendo en ese momento detectado por agentes o civiles que colaboraban con la represión. Por lo anterior, el día 23 de octubre durante la mañana, concurrió un pelotón de la marina al mando del teniente Oreste Rojas a la casa de sus suegros para detenerlo quienes lo trasladado al Sanatorio Naval, lugar en el cual operaba aquella Unidad. Una vez que llegó allí, relata que fue golpeado permanentemente. Añade que el teniente Rojas y el sargento Espinoza, participaba directamente en conjunto con su equipo. Indica que en su caso particular y a consecuencia de lo perturbados que se encontraban era “prestado” a carabineros y detectives con la finalidad ser golpeado en fiestas, y que los mismos se encontraban ebrios.

Sostiene que los carabineros lo torturaban aplicándole corriente eléctrica en los dientes, lo que hizo que perdiera alguno de ellos, quedando otras piezas débiles, por lo que con el transcurso del tiempo también se desprendieron.

Manifiesta que por casualidad tuvo la oportunidad de enviar un recado a un mayor de carabineros, señor Bezoain, atendido que lo conocía porque ambos tenían al cuidado familiares con discapacidad, razón por la que en variadas ocasiones se encontraban en los controles médicos. Agrega que a las horas llegó el mayor, a quien le contó lo sucedido y pidiéndole que por favor gestionara su traslado a otro lugar, a lo que le contestó que era posible conseguir dicho traslado pero que no le aseguraba que las condiciones fueran mejores, sin embargo insistió toda vez que aquel lugar lo estaba enloqueciendo. Dicha petición se resolvió de forma rápida, por lo que alrededor de las 19 horas lo transportaron a la base aeronaval de El Belloto.

Expone que estando en dicha base, al segundo o tercer día se iniciaron los interrogatorios, en los cuales las preguntas consistían en indagar sobre la ubicación de las armas, los lugares en se efectuaba instrucción militar, etc, asimismo en el ámbito personal, lo interrogaban sobre su participación como dirigente poblacional. Indica que era presionado para entregar nombres u otro tipo de información, haciéndolo escuchar gritos de dolor y amenazas de fusilamiento para su familia, diciéndole que estaban en la pieza contigua. Amplifica en que los integrantes del Servicio de Inteligencia Naval combinaban la tortura física con la psicológica, como aventajados alumnos de sus escuelas de formación.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFxEK

«RIT»

Foja: 1

Reitera que en la base descrita los interrogatorios eran acompañados de crueles y sádicas torturas, ya que no solo recibían el castigo de forma personal, sino que también los obligaban a presenciar torturas hacia otras personas, con la finalidad de atemorizarlos en extremo. Asimismo refiere, que fue testigo de horribles torturas provocadas a mujeres, introduciéndoles ratas a sus vaginas, técnica de la cual se enteraron que también eran utilizadas en otros centros de detención. Indica que además era amenazado en lo terrible que sería el último interrogatorio, lo que haría que hablara y aceptara todo porque sería muy fuerte.

Relata que se mantuvo por tres semanas aproximadamente en la base naval de El Belloto, siendo reubicado a una de las prisiones flotantes, correspondiente al buque mercante Lebu. Indica que estando allí lo que recuerda de forma más nítida son los castigos con agua, ya que los marinos los llevaban a cubierta en la madrugada y los mojaban con mangueras, usando pistones de mucha presión, lo que era motivo de burlas por parte de dichos funcionarios por la desesperación que le provocaban, ridiculizando los esfuerzos que debía hacer con el fin de agarrarse de algún lugar. Agrega que alguno de los castigos fue ocasionado por culpa de otro preso perturbado, quien llamaba a los guardias para acusarlos de conspirar en contra del gobierno militar. Destaca que en otra oportunidad quedó a cargo del recinto un joven, que al verse con tal poderío, comenzó a maltratarlos, provocando una fuerte reacción, ya que los detenidos dejaron de obedecerle, e incluso alguno de ellos prendieron fuego a las colchonetas. Dicha situación no se acrecentó, atendido que intervinieron otros oficiales y algunos detenidos. Hace presente que en ese lugar se mantuvo hasta fines del mes de diciembre de 1973.

Describe que entre la época de navidad y año nuevo fue conducido a la Cárcel de Valparaíso por orden de la Fiscalía Naval emanada de la causa N° 80. Indica que se le asignó la celda N° 203 y que si bien es cierto el régimen de prisión era diferente, de todas formas continuó su sufrimiento y el menoscabo a las personas, realizándose además allanamientos y registros. Recuerda que en una ocasión vivió un gran peligro por una provocación tramada por el Teniente de Gendarmería Luis Soto, quien montó un operativo en conjunto con los infantes de marina y carabineros. Señala que dicha situación se inició con la selección de algunos detenidos que figuraban con mayor ascendiente entre los presos políticos a los cuales se les dio una feroz paliza. Añade que con este abuso de poder y castigo injustificados buscaban provocar la reacción de una gran cantidad de detenidos, y así poder establecer un motín. Asimismo tenían previsto que ante este hecho, ingresaría la fuerza de apoyo que esperaba semicamuflada al interior del penal, oprimiendo la desobediencia, lo que finalmente no ocurrió ya que los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

detenidos se percataron de las intenciones de estos funcionarios y por lo tanto aguantaron con gran entereza, haciendo fracasar el plan del señor Soto y otras autoridades.

Narra que en esa cárcel permaneció hasta el mes de octubre de 1974, y que una vez que fue dejado en libertad no pudo encontrar trabajo, ya que era conocido en Limache, cuya ciudad cuenta con una población muy conservadora y por tanto el control y poder de la misma era ejercida por unas pocas familias quienes le daban a entender que ellos actuaban por acuerdo. Indica que en ausencia de régimen democrático y bajo el régimen dictatorial, se le consideraba como enemigo, por lo que no solo soportaba la pobreza por ver frenada su posibilidad de encontrar trabajo, sino que además se le perseguía de manera burda, lo que llevó a que en el año 1975, encontrándose en la calle Independencia con los Álamos, se detuvo una patrulla de carabineros en la cual iba el sargento Atilio Estay y otro carabinero de apellido Becerra, quienes lo trataron con mucho respeto refiriéndose a él como señor Valenzuela, y pidiéndole que los acompañara a la Comisaría. Indica que una vez que llegaron el buen trato cambió, dejándolo detenido durante toda la noche en conjunto a otros detenidos por sospecha. Tal atropello a su persona lo condujo a presentar una queja ante el fiscal naval, solicitándole que finalizara con la persecución, o bien se le detuviera por algún cargo concreto.

En relación a los fundamentos de derecho, refiere a que la responsabilidad del Estado se origina en los perjuicios ocasionados por los órganos de su administración, cuestión que se encuentra reconocida tanto en la Constitución Política de la República de 1980, como en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Cita doctrina que define dicha responsabilidad. Asimismo transcribe los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución de 1980, y los artículos 1, 2, 3, 4 y 44, de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575.

Sostiene que la norma descrita en el artículo 44 de la ley orgánica mencionada, establece que en nuestro país rige la responsabilidad directa del Estado, por lo daños provocados por los órganos de su Administración en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y que dicho daño se cause, ya sea por un funcionamiento normal o anormal, toda vez que el legislador no distingue. Menciona jurisprudencia emanada de la Corte de Apelaciones referente a esa responsabilidad. Además indica que el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Controlaría General de la República dispone a nivel normativo la responsabilidad señalada, así como también la doctrina se ha expresado respecto de ese concepto.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

Manifiesta que la responsabilidad del Estado es de derecho público toda vez que se encuentra contenido en diversas normas que son parte de ese ámbito. Transcribe parte de algunos fallos dictados por la Excelentísima Corte Suprema pertinente a lo expuesto.

Describe diversa doctrina que ha estudiado sobre la responsabilidad del Estado, concluyendo que esta responsabilidad puede tener su origen tanto en actuaciones lícitas como ilícitas por parte de su Administración. Lo anterior arguye, se debe a que el artículo 38 de la Constitución no considera ese tipo de elemento para constituir la responsabilidad pública, apoyándose en su nuevo criterio, el cual el de la lesión, y por tanto dicha responsabilidad deriva de toda lesión producida a los particulares, entendida como perjuicio antijurídico, y que aquellos no tienen el deber de soportar por no existir causa que justifique el daño, sea que provengan de hechos o actos administrativos lícitos o ilícitos.

Expone sobre las características de la responsabilidad del Estado, señalando que la misma es constitucional, atendido que se regula bajo esa supremacía y por ende no busca castigo de un culpable, sino que al ejercicio de la función estatal, que tiende al bien común. Por otra parte aduce que esta responsabilidad se consagra de modo genérico para todos los órganos del Estado y de modo específico para todos sus órganos administrativos, además de tratarse de una persona jurídica estatal, por lo que dicha responsabilidad se funda sobre la base de la causalidad material, así como también es directa. Añade que al tratarse de un órgano del Estado, esta responsabilidad se rige por el derecho público, que es aquel que regula la actividad del estado referente al bien común. Por último indica que esta responsabilidad es íntegra toda vez que debe repararse todo el daño producido injustamente a la víctima.

Explica que el hecho que funda el presente libelo es de aquellos que corresponden a un crimen de lesa humanidad. Refiere que dicho término no técnico comenzó a utilizarse desde el año 1915 y en declaraciones posteriores a la Primera Guerra Mundial, pero como concepto independiente se usó en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Núremberg, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, como una respuesta a la insuficiencia de la categoría Crimen de Guerra, la que solo podía aplicarse a actos que afectaren a combatientes enemigos dejando de lado a los crímenes en que las víctimas eran del mismo país o de Estados aliados o apátridas. Indica que su noción encuentra su autonomía definitiva en el Primer Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad del año 1954, en el cual se definió. Señala que con el avance del derecho internacional, se reconoce la vinculación del jus cogens con los delitos de naturaleza de lesa humanidad y que fue la Convención



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

de Viena sobre Derechos de los Tratados, del año 1969, la que amparó de manera definitiva en el derecho internacional el concepto de un derecho imperativo u obligatorio, denominado jus cogens. Menciona los artículos 53 y 64 de dicha Convención para fundar lo referido. Asimismo indica que estas características de derecho imperativo u obligatorio respecto de los crímenes de lesa humanidad se fue constatando a través de la jurisprudencia internacional. Menciona jurisprudencia emanada de la Corte Internacional de Justicia resolviendo bajo este concepto.

Señala que en el ámbito nacional, también existe regulación vigente respecto a dilucidar cuando se está frente a un delito de lesa humanidad y al efecto cita el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Congreso Nacional, y el que entró en vigencia en nuestro país el 1 de septiembre de 2009, en el que en su artículo 7 describe este tipo de crímenes. Indica que en este caso precisamente corresponde a un ilícito de aquellos que constituyen delitos de lesa humanidad, razón por la que el Estado Chileno no puede evadir su responsabilidad civil en relación a los padecimientos y daños provocados.

Hace presente que en cuanto a la prescripción de la acción reparatoria, en ocasiones se sostuvo que debía aplicarse el derecho común a este tipo de crímenes, todo da vez que no existían normas especiales para estos casos, y en particular lo previsto en el artículo 2332, norma que fija el plazo de los 4 años contados desde la realización del acto, lo que llevaría a una interpretación errónea, toda vez que al aplicar dicha normativa se estaría incumpliendo, por parte del Estado de Chile, los Tratados Internacionales de Derecho Humano. Por lo anterior, menciona y transcribe parte de una serie de fallos dictados en Tribunales Chileno mediante los cuales resuelven sobre la inaplicabilidad del derecho común a este tipo de causa, concluyéndose que el Estado no puede pretender eludir su responsabilidad en los hechos expuesto en el libelo, ya que precisamente en artículo 5 de la Constitución se establece un límite a la soberanía nacional y al derecho interno, los cuales son los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

Revela que el daño moral es aquel que corresponde a una lesión inmaterial o agravio inferido por un sujeto al derecho subjetivo inherente a la persona de otro sujeto, como lo son los dolores, sufrimientos, molestias, etc., y los cuales son motivo de una indemnización. Refiere que la jurisprudencia ha considerado que dicho daño tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito provoca a la sensibilidad física o a los sentimientos de una persona. Afirma lo anterior con lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema respecto a este tipo de daño. Además señala que en relación a la prueba para acreditarlos, tanto la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFxEK

«RIT»

Foja: 1

doctrina como la jurisprudencia han coincidido en que no se necesita prueba alguna, bastando solo a la víctima el acreditar la lesión de un bien personal.

Aduce que en cuanto al deber de responder por los daños producidos por vulneración de los derechos fundamentales, según en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos se establece el pago de una justa indemnización a la parte lesionada, una vez que se decida que hubo violación a un derecho o libertad protegido por esa Convención, así también lo ha resuelto la Corte de Apelaciones en diversos fallos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales menciona.

Reitera que el demandante, al tenor de lo reseñado, durante toda su vida ha estado presente el sufrimiento y la angustia que le produjeron las distintas torturas física y psicológicas ocasionadas por agentes del Estado, y que si bien es cierto el Estado Chileno ha realizado diversos esfuerzos en resarcir los perjuicios a través de pensiones asistenciales y simbólica a todas las víctimas de estos hechos, éstas solo han tenido un carácter general, sin tomar en cuenta las situaciones específicas de cada una de las personas que fueron sujeto de apremios ilegítimos.

Finaliza haciendo presente que el monto solicitado no se escapa de lo ya ofrecido a otras víctimas por parte del Estado Chileno, por lo que el monto demandado no es ajeno a esa realidad.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización por daño moral, en contra del Fisco de Chile, ya individualizado, someterla a tramitación y que en definitiva se acoja en todas sus partes, condenándose al demandado al pago de \$300.000.000 a favor del demandante, más intereses y reajustes legales, con costas o en subsidio, que se condena al pago de las cantidades de dinero y/o prestaciones que el Tribunal estime de acuerdo a la justicia y equidad, y al mérito de autos, debidamente reajustada y con intereses más las costas.

Que a folio N° 14, comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, quien viene en contestar la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones, defensas y alegaciones que pasa a exponer.

En primer lugar reitera lo solicitado por el demandante en el libelo, el que asciende a la cantidad de \$300.000.000, por concepto de indemnización de perjuicios.

Enseguida opone la excepción de reparación integral, toda vez que el demandante ya fue indemnizado. Señala que el régimen jurídico de este tipo de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

Foja: 1

reparaciones por transgresión a los derechos humanos debe comprenderse desde el punto de vista jurídico nacional e internacional, con la llamada Justicia Transicional. Añade que uno de los pilares en los cuales descansa esta justicia es en el dilema denominado justicia versus paz, y que tiene como fundamento la necesidad de un país tranquilo que mira sus errores del pasado y con ello pronunciarse sobre el nunca más. Indica que a su vez no debe olvidarse desde la perspectiva de las víctimas la reparación de los daños sufridos, el que juega un rol importante en el reconocimiento de la medida de la justicia buscada por tantos años.

Refiere que las negociaciones entre el estado y las víctimas demuestran que toda reparación es una decisión compleja de destinar recursos económicos públicos que satisfagan ciertos tipos de necesidades públicas a otras radicada en grupo de personas más específicos. Dichos intereses se muestran normalmente en la diversidad de contenidos que se proponen como programa de reparación en las Comisiones de Verdad o Reconciliación. Estos programas incorporan beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otros análogos diversos que se remiten a la entrega de una cantidad determinada de dinero y que atendida la complejidad de estas negociaciones, muchas veces se privilegia a algunos grupos por sobre otros o se compensan ciertos daños y se dejan de lado otros o simplemente estos se fijan por vía legal, luego de un acuerdo público.

Sostiene que durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, en relación a la justicia transicional, se arribó a tres objetivos principales los cuales eran a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura; b) la provisión de reparaciones para los afectados; y c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse. Indica que respecto al segundo objetivo, la Comisión de Verdad y Reconciliación, llamada Comisión Rettig, en su informe final, planteó una serie de propuestas de reparación, dentro de las cuales estaba la “pensión única de reparación para los familiares directo de las víctimas”, y algunas prestaciones de salud. Señala que dicho informe originó la dictación de la Ley N° 19.123 mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, siendo el mensaje principal del proyecto de esa ley, el buscar la reparación precisamente del daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas.

Señala que la idea reparatoria se plasmó de forma clara en la ley mencionada, estableciéndose distintos mecanismo a través de los cuales se ha concretado esta compensación, y que esta se ha materializado mediante tres



«RIT»

Foja: 1

formas; a) reparaciones a través de transferencias directas de dinero, b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, y c) reparaciones simbólica. Agrega que a través de aquellas se ha cumplido con el objetivo del proceso de justicia transicional, el que busca precisamente la reparación moral y patrimonial de las víctimas.

En relación a lo anterior, indica que se ha establecido la reparación mediante transferencias directas de dinero, en las que además se incluyó a las personas víctimas de apremios ilegítimos, destacando que la legislación dispuesta al efecto enfrentó dos posiciones que tenían que ver con la entrega de una suma de dinero o bien con una pensión vitalicia, y que en ambos casos los fines eran innegablemente resarcitorios, estimando que a diciembre del año 2015 el Fisco habría desembolsado por este concepto la suma total de \$706.387.596.727. Señala que respecto a la pensión mensual, también es una forma de reparar el perjuicio y el cálculo para efectos indemnizatorios se efectúa sumando las cantidades que ya se han pagado bajo ese criterio, adicionando las mensualidades que se deben pagar en el futuro, y con ello es posible apreciar el alto impacto que estas han tenido.

Manifiesta que en cuanto a las reparaciones específicas establecidas en la Ley N° 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos, el demandante ha recibido beneficios pecuniarios bajo dicha normativa, toda vez que en ella se estableció una pensión anual de reparación, además de otorgar otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos en el anexo listado de prisioneros políticos y torturados de la nómina en la cual se les ha reconocido como víctimas. Señala que se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años, de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 años o más y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años. Asimismo indica que el actor recibió recientemente el Aporte Único de Reparación de la Ley N° 20.874 por el monto de \$1.000.000.

Refiere sobre las reparaciones que se han hecho de acuerdo a la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, en el sentido que a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, y de la Ley N° 19.992 se les concedió el derecho a la gratuidad en las prestaciones médicas, dadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en los Servicios de Salud del país, el que se accede concurriendo al hospital o consultorio de salud correspondiente al domicilio del beneficiario, e inscribiéndose en la oficina del PRAIS pertinente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

Añade que además del acceso gratuito a este tipo de prestaciones, el PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario, que atienden de forma exclusiva a los beneficiarios del programa. Asimismo adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios de FONASA, además del derecho a organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de autoridad sanitaria crea, así como también obtienen el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIA en la difusión del programa y la promoción del resto de los Derechos Humanos, ofreciéndoles apoyo técnico y rehabilitación física. Refiere que de igual forma se incorporaron beneficios educacionales, consistentes en la continuación de los estudios básicos, medios y superiores de manera gratuita, el que además se traspasa a sus hijos o nieto en caso de no utilizarse. Por último también se les ha entregado beneficios en vivienda a través de subsidios.

Aduce que parte de estos procesos de justicia transicional también es importante la reparación del daño moral ocasionado a las víctimas de trasgresión a los derechos humanos, lo que se realiza por medio de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas trasgresiones. En este sentido, enfatiza en la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como la construcción de Memorial del Cementerio General en Santiago del año 1993, la fijación del día Nacional del Detenido Desaparecido, mediante el Decreto N° 121, que recae en el 30 de agosto de cada año, la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, establecimiento por Ley N° 20.405 del Premio Nacional de los Derechos Humanos, y además de la construcción de distintos memoriales y obras a lo largo del país, así como también de obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, etc.

Hace presente que hasta hoy el Estado ha hecho importantes esfuerzos con el fin de reparar a las víctimas de Derechos Humanos, cumpliendo con estándares internacionales de Justicia Transicional y entregando indemnizaciones acordes con la realidad económica del país, las que han compensado a dichas víctimas por los daños morales y patrimoniales sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos. Por lo anterior indica, que la indemnización solicitada en la demanda como el conjunto de reparaciones ya mencionadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por idénticos hechos, por lo que no procede que sean reparados nuevamente. Cita jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha fallado bajo ese criterio. En el mismo sentido refiere que diversas sentencia han resuelto, que el propósito de las leyes



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

dictadas respecto de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de estas, lo que es congruente con las resoluciones emanadas de Tribunales Internacionales respecto a la improcedencia de la indemnización

Expresa que de acuerdo a lo anterior los órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado de forma positiva la política de reparación de violaciones de los Derechos Humanos implementada en el país, a tal extremo que ha rechazado otra forma de reparación pecuaria, luego de tomar en consideración los montos ya entregados por el Estados por concepto de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Asimismo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha estimado que es beneficioso establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas con la finalidad de no provocar desigualdades. Por los motivos esgrimidos opone la excepción de reparación satisfactiva toda vez que el demandante ya ha sido indemnizado.

Opone además la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios de conformidad al artículo 2332 en relación al artículo 2497 del Código Civil, toda vez que el demandante en su presentación señala que la detención ilegal, prisión política y torturas sufridas desde el 23 de octubre de 1973 a octubre del año 1974, sin especificar la fecha exacta en este caso, y que luego se le detuvo nuevamente el año 1975, en la noche, sin indicar la fecha precisa en que se habría producido. A su vez y entendiendo que la prescripción se encontraba suspendida hasta la vuelta de la democracia, también la acción se encontraría prescrita por haber transcurrido en exceso el plazo contenido en la ley. A consecuencia de lo señalado, opone dicha excepción correspondiente a 4 años prevista en el artículo 2332 del Código de Bello, solicitando acogerla y de este modo se rechace íntegramente la demanda intentada. En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años, prevista en el artículo 2515 en relación al artículo 2514 del Código ya mencionado, toda vez que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la data de la notificación del presente libelo, ha transcurrido con creces el plazo dispuesto en la norma legal ya citada.

Explica las generalidades de la prescripción, señalando que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre de un texto constitucional o legal expreso que así lo prevenga, lo que en este caso no existe. Asimismo indica que la prescripción es una institución universal y de orden público. Añade que en el Código Civil, en el Título XLII del Libro IV, se encuentran contenidas las normas que regulan dicha institución y en específico, en su artículo 2497 establece las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

normas de la prescripción en favor y en contra del Estado. Colige que la prescripción no exime de responsabilidad ni elimina el derecho a indemnizar, sino que solamente ordena y pone un límite necesario en el tiempo para que se deduzcan en juicio las acciones pertinentes, existiendo una armonía en las leyes que se rigen esta materia y que en este caso el demandante tuvo muchos años para ejercer dicha acción. Transcribe el extracto de una sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema la que ha declarado que las acciones civiles en estos casos se rigen por las normas del derecho común, toda vez que los tratados internacionales establecen la imprescriptibilidad respecto de las acciones penales, y no de las acciones civiles.

Sostiene que la acción indemnizatoria no tiene un carácter sancionatorio, si no que su contenido es netamente patrimonial, y la cual persigue la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que debe aplicarse las normas de prescripción contenidas en el Código Civil. Agrega que, aun cuando el demandante funda la imprescriptibilidad de las acciones en Tratados Internacionales, lo cierto que en ellos tampoco se contempla esa institución en relación a las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad, o bien que prohíban o impidan la aplicación del derecho interno en esa materia. Describe la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Los Convenios de Ginebra, La resolución N° 3.074 de fecha 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, La Convención Americana de Derechos Humanos, indicando que en ninguna de ella se establece la imprescriptibilidad de las acciones civiles. Por lo latamente expuesto, solicita que se rechace la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

Manifiesta que en relación al daño e indemnización pedida, es difícil de avaluar y apreciar de forma pecuniaria, ya que corresponden a daños no patrimoniales sufridos, y por tanto su contenido no es de índole económica, o al menos no directamente, atendido que la indemnización de perjuicio tiene como finalidad restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, entregando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, y con ello quede en el mismo estado previo al acto que le produjo daño. Por este motivo la indemnización del daño moral no se determina ponderando el valor de la pérdida o la lesión experimentada, sino solo otorgándosele a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita minimizar este daño o hacerlo más soportable, a través de una cantidad u otro medio. Indica que no existe una norma legal que regule lo anterior, por lo que se debe estar a los principios generales y básicos de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

cuantificación correspondiste a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado. Señala que en este sentido la cifra solicitada por el actor es excesiva, teniendo en cuenta las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios que han fijados los Tribunales de Justicia, los que han sido fijados con mucha prudencia. Cita jurisprudencia de Ilustrísima Corte de Apelaciones y Excelentísima Corte Suprema que ha resuelto bajo ese argumento.

Señala que en subsidio de anterior, su parte alega que respecto a la fijación del daño moral por los hechos relatados, en ellos se deben considerar todos los pagos recibidos durante todos estos años por el demandante de parte del Estado, conforme a las leyes ya mencionadas, las que además seguirá percibiendo a título de pensión, así como también los beneficios extramatrimoniales, cuyo objetivo también es la reparación del daño moral. Añade que el no accederse a esta petición, involucraría un doble pago por el mismo hecho, lo que es contrario a los principios jurídicos básicos del derecho. Asimismo señala que debe tomarse en cuenta los montos establecidos en las sentencias dictadas por los Tribunales en esa materia.

Finaliza haciendo presente sobre la improcedencia del pago de reajustes e intereses, ya que los reajustes solo proceden una vez que se haya dictado la sentencia que acoja la demanda y ordene dicha obligación y que además la misma se encuentre firme y ejecutoriada, por esta razón no existiendo sentencia dictada en autos, su representado no tiene ninguna obligación de indemnizar y por tanto no existe suma alguna que reajustar, y además estos solo deben ser contabilizados una vez que se dicta la sentencia que los concede. Refiere que en atención a los intereses, el artículo 1551 del Código Civil insta de manera expresa que el deudor no se encuentra en mora mientras no haya sido reconvenido y haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

Que a folio N° 21, comparece doña Ruth Israel López, abogada en representación de la demandada quien estando dentro de plazo legal evacua el trámite de la dúplica, mediante la cual ratifica todas las argumentaciones expuestas en la contestación, las que da por reproducidas, solicitando el rechazo de la acción deducida.

Reitera en que el actor ya ha sido indemnizado de conformidad a la reparación integral, en relación a lo económico, salud, educación, y en el ámbito moral y satisfactivo.

Señala que el marco legal que esboza su parte al oponer la excepción de reparación satisfactiva., se dictó con el fin de atender íntegramente la reparación



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

de las víctimas y los familiares de las mismas, mediante las cuales se adoptaron las directrices del derecho humanitario que se impone a los Estados para establecer programas de reparación del daño causado. Asimismo la comunidad internacional pide a los Estados investigar estos ilícitos, y con ellos sancionar a los responsables y reparar a las víctimas o a sus familiares.

Añade que nuestro país ha cumplido con cada uno de los aspectos pedido y que ha sido reconocido internacionalmente.

Refiere que se ha explicado latamente que la presente acción se encuentra contenida en lo que se denomina la justicia transicional, cuya regulación demuestra que el actor ha elegido los beneficios reparatorios de la Ley N° 19.123 y sus modificaciones, siendo su texto claro en comprender el daño moral en forma expresa y establecer la incompatibilidad de sus beneficios con las pretensiones de una acción judicial.

Indica que a la fecha el actor ha percibido hasta la fecha los beneficios y montos establecidos en las leyes de reparaciones citadas.

Respecto de la prescripción de la acción deducida, insiste en la importancia de la sentencia que unificó la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, la que se transcribo en sus principales argumentos en el escrito de contestación, y la que concluye que las acciones de responsabilidad extracontractual del Estado prescribe en 4 años contados de la ocurrencia de los hechos, según lo previsto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación al artículo 2497 del mismo cuerpo legal ya citado, agregando que la misma ha estimado que los tratados internacionales de derechos humanos no impiden la aplicación del derecho interno, y en específico a lo expresado sobre la prescripción de la acción civil. Alude a jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha resuelto bajo ese argumento.

Que a folio N° 24, se recibió la causa a prueba, fijándose los puntos substanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales iba a recaer.

Que en folio N° 42, se tuvieron por formuladas las observaciones a la prueba hechas por la parte demandante.

Que a folio N° 44, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio N° 1, comparece don César Barra Rozas, abogado, en representación de don Gerardo del Tránsito Valenzuela Valenzuela, quien deduce demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios en contra del



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

Fisco de Chile, todos ya individualizados, solicitando someterla a tramitación y que en definitiva se acoja en todas sus partes, condenándose al demandado al pago de \$300.000.000 a favor del demandante, más intereses y reajustes legales, con costas o en subsidio, que se condena al pago de las cantidades de dinero y/o prestaciones que el Tribunal estime de acuerdo a la justicia y equidad, y al mérito de autos, debidamente reajustada y con intereses más las costas.

Funda su demanda, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan expresamente por reproducidos para todos los efectos legales.

SEGUNDO: Que a folio N° 14, comparece doña Ruth Israel López, en representación del Fisco de Chile, quien estando dentro de plazo legal contesta la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas que pasó a exponer.

Argumenta su defensa, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran esgrimidos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan íntegramente por reproducidos para todos los efectos legales.

TERCERO: Que a folio N° 21, comparece la parte demandada, quien estando dentro de plazo legal, evacúa la dúplica, ratificando todas las argumentaciones efectuadas en la contestación.

Basa su dúplica en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueran enunciados en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan por totalmente por reproducidos para todos los efectos legales.

CUARTO: Que a folio N° 24, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales iba a versar, los siguientes:

1.- Efectividad de haberse verificado los hechos sobre los que hace consistir el actor su demanda. En la afirmativa anterior, efectividad que tales hechos hayan causado daños y perjuicios a la demandante, en su caso, naturaleza y monto de los mismos;

2.- Efectividad de haber obtenido la parte demandante reparación de los supuestos perjuicios cuya indemnización ha demandado, en la afirmativa, naturaleza, época y monto de los pagos efectuados.

3.- Concurrencia de los elementos de hecho y antecedentes constitutivos de la prescripción extintiva de la acción alegada y de su interrupción en su caso.

QUINTO: Que. En apoyo a sus asertos, la parte demandante ofreció y rindió los siguientes medios de prueba:

I-Prueba documental:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

1-En el folio 37:

1.1-Informe de la Comisión Nacional sobre prisión Política y Tortura .

1.2- Nómina donde consta que mi representado se encuentra en el informe comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

En dicho documento, en su página 607, bajo el N°25.280, figura dentro del listado de víctimas de prisión política y tortura a Gerardo Del Tránsito Valenzuela Valenzuela.

2-En el folio 38:

1. Sentencia de la Corte Suprema, Rol N°16914-2018 de fecha 27 de Septiembre del año 2018.

2. Sentencia de la Corte Suprema, Rol N°17010-2018 de fecha 20 de Septiembre del año 2018.

3. Sentencia de la Corte Suprema, Rol N° 29454-2018 de fecha 24 de Diciembre del año 2018.

4. Sentencia de la Corte Suprema, Rol N° 17710-2019 de fecha 24 de Octubre del año 2019.

5. Informe sobre las secuelas dejadas en el plano de la salud mental relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, en un contexto general.

6. Copia simple de informe emanado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), que analiza la situación de salud sufrida tanto por las víctimas como por las familias vinculadas a la prisión política y tortura

7. Copia simple de informe emanado por la O.N.G. ILAS

SEXTO: La demandada, por su parte, proporcionó, previa solicitud, y acompañada en el folio 34, el oficio ordinario DSGT N°4792-4334 del Instituto de Previsión Social, de 1 de diciembre de 2021, en que se informa beneficios de reparación del actor Gerardo Valenzuela Valenzuela.

En dicho antecedente, consta que entre marzo de 2005 a noviembre de 2021, recibió una pensión Ley 19.992 por \$32.583.544.-; un aporte único Ley 20.874 de \$1.000.000 y \$538.949 por concepto de aguinaldos, lo que hace un total de \$34.122.493.-

Su pensión actual es de \$222.864.-

I-En cuanto a la excepción de reparación integral

SEPTIMO: En primer término, corresponde resolver la alegación opuesta por la demandada, y que dice relación con la reparación integral de los actores destinadas a enervar la acción indemnizatoria por daño moral pretendida, fundada



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

en los beneficios de los que ha recibido el actor conforme a las Leyes 19.123, 19.992 y 20.874.

Ha acompañado como antecedente el documento refrendado en el considerando sexto, en la que consta que los demandantes han recibido las prestaciones que se indican, según respuesta de oficio evacuado en el folio 34.

OCTAVO: Que, en el contexto político vivido a nivel nacional entre los años 1973 y 1990, el artículo 1 de la Ley N°19.123 dispone la creación de la *“Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Su domicilio estará en la ciudad de Santiago”*.

Su objeto será la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por decreto supremo N° 355, de 25 de abril de 1990, y las demás funciones señaladas en la presente ley”.

En ese sentido, una de las finalidades de la aludida Corporación, conforme al numeral 1 del artículo 2 de la citada ley consiste en *“Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”*, recayendo en las personas consideradas víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En refuerzo de esta normativa, el artículo 1 de la Ley N°19.992, concede una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.

En el mismo orden de cosas, la Ley N°20.874 concede a dichas personas un beneficio económico único, tal como dispone su artículo 1°.

NOVENO: Respecto de la defensa en estudio, no desconoce este sentenciador los esfuerzos y la implementación de políticas de Estado vigentes hasta hoy en miras a perseguir la reparación del daño causado por agentes de Estado en el contexto del régimen vigente entre 1973 y 1990, recogidos a través de los informes de la Comisión de Prisión Política y Tortura, que refrendan e



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFxEK

«RIT»

Foja: 1

incorporan a las víctimas de violaciones a los llamados Derechos Humanos, cuya dimensión político-social, precisamente, apuntaba a la reparación y fortalecimiento de las instituciones democráticas y la consolidación de la responsabilidad del Estado frente a estas acciones, lo que también se ha traducido en las diversas persecuciones penales aún vigentes hasta el día de hoy.

En este escenario, es claro que la Ley N°19.123 y las que se han dictado posteriormente han concedido una serie de beneficios, entre ellos los directamente pecuniarios, tanto en materia de salud como otros de carácter simbólico, los que se enmarcan dentro de las finalidades de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, según su artículo 2 antes aludido, destinadas a “promover la reparación moral” de las víctimas.

Sin embargo, el hecho que estas prestaciones se hayan fijado por ley en beneficio de las aludidas víctimas gira en torno al concepto de reparación en todas sus dimensiones y, precisamente, dentro de la finalidad que se anota en el párrafo precedente, esto es, la reparación moral, hecho que no supone impedir el ejercicio de acciones civiles contra el Estado por parte del actor.

No consta que las prestaciones otorgadas supongan una renuncia a la acción civil indemnizatoria que por este acto se entiende, lo que permite colegir, en principio, que la excepción reclamada por la demandada es improcedente.

A mayor abundamiento, las diversas prestaciones reconocidas a nivel legal no apuntan necesariamente a resarcir la dimensión moral del sujeto, sino también el ámbito estrictamente patrimonial y recuperar la pérdida de chances causadas por los actos de agentes estatales (lucro cesante), los que también se ven dirigidos a sus parientes, tales como los referidos al ámbito educacional y en materia de salud.

DÉCIMO: En definitiva, este sentenciador rechazará la excepción en estudio conforme al razonamiento precedente.

II-En cuanto a la excepción de prescripción extintiva.

UNDÉCIMO: De manera subsidiaria a la excepción antes descrita, la parte demandada opuso la de prescripción extintiva de la acción civil, sea en los términos dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, o bien conforme al artículo 2515 del mismo cuerpo legal, en consideración a la data de los hechos que sirven de sustento de la acción en relación con la interposición y posterior notificación de la demanda.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

DUODÉCIMO: En relación con esta materia, la institución de la prescripción, en los términos del artículo 2492 del Código Civil, que precisamente se encuentra destinada a la consolidación de la “seguridad de las posesiones y del crédito”, tal como indica el mensaje de dicho cuerpo normativo.

En relación con esta premisa, el artículo 2493 del mismo cuerpo legal es claro en señalar que *“El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”* y que el artículo 2497 establece que *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Respecto a esta materia, conforme a la responsabilidad civil extracontractual que se reclama, el artículo 2332 del Código Civil establece que *“Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”*.

DECIMOTERCERO: Es un hecho de la causa –y que al menos no aparece controvertido por la demandada-, que el actor sufrió una detención por parte de agentes del Estado, entre octubre de 1973 y octubre de 1974, y otra detención en una fecha indeterminada de 1975, en el contexto político vigente en la época.

Al respecto, es necesario destacar el concepto de delito de lesa humanidad que se encuentra regulado en la Ley N°20.357, que en su artículo 1° indica que *“Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo, cuando en su comisión concurren las siguientes circunstancias:*

2°. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos”.

El mismo articulado, luego de referirse a los delitos de lesa humanidad, al genocidio y crímenes de guerra, dispone en el artículo 40 que *“La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”*.

En relación con lo expuesto, del informe de la Comisión respectiva –y acompañado a los autos-, se describen los delitos cometidos entre 1973 y 1990, los que obedecieron a razones de índole política y que se encuentran vinculados a actos del Estado, en la forma que en dicho documento se consigna latamente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFxEK

«RIT»

Foja: 1

DECIMOCUARTO: En este análisis, y por aplicación del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, se desprende que rige, dentro de ese estándar normativo, lo dispuesto en artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que ha sido ratificado por el Estado Chileno y se encuentra actualmente vigente, que dispone al efecto que *“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada”*.

Sobre el particular, y en diversas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido enfática en establecer, por una parte, que *“que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo”*, mientras que *“la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”* (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia “Velásquez Rodríguez vs Honduras”, dictada con fecha 21 de julio de 1989, párrafos 25 y 26. Consultado en <https://summa.cejil.org/es/entity/i0qbrq3n93utmx6r?page=9>; fecha de consulta 28.04.2022)

DECIMOQUINTO: Todo este razonamiento que se viene sosteniendo hasta acá permite llevar a la conclusión que, en primer término, en materia de Derecho Internacional, y reconocido a nivel interno, los llamados delitos de lesa humanidad gozan de la imprescriptibilidad de la acción penal.

En segundo lugar, sobre la base de la vulneración de los derechos que esas acciones lesivas han causado sobre sectores de la población, los estatutos internacionales que han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, conceden un derecho a reparación integral, lo que no sólo permite el derecho al recurso y a la acción judicial, sino al resarcimiento de todo perjuicio patrimonial ocasionado y del que se requiera efectiva reparación.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFEXK

«RIT»

Foja: 1

En este aspecto, lo refrendado en el considerando anterior deja en evidencia que, frente a las dificultades en la persecución de estos hechos y la satisfacción del derecho a la “reparación integral”, resulta contraproducente entonces aplicar un estatuto de prescripción extintiva a hechos de esta naturaleza, por cuanto se oponen al ordenamiento internacional frente a esta prerrogativa de reparación integral, que resulta predominante por sobre la consolidación de las relaciones jurídicas en base al mero transcurso del tiempo. De lo contrario, se vulneraría precisamente aquel derecho antes citado, por lo que debe necesariamente la acción civil derivada de estos hechos compartir la misma imprescriptibilidad que la acción penal.

No es obstáculo, a juicio de este sentenciador, que los tratados y la normativa internacional aplicadas en esta litis sean posteriores en cuanto a su vigencia al ordenamiento interno, pues los primeros predominan en su aplicación al referirse a derechos inherentes a la naturaleza humana y, por ende, reconocidos dentro del contexto internacional, dado su interés público, los que tiene como base principios de índole superior y que buscan la protección de los derechos más esenciales de cada ser humano.

Además, las normas de prescripción rigen esencialmente para relaciones entre privados y, en el caso de aplicarse en los términos del artículo 2497 del Código Civil, dicen relación con toda cuestión contractual y patrimonial en las que predomina el interés privado en las relaciones con el Estado y sus órganos.

Disponer su aplicación por sobre los tratados internacionales, además, colisiona con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al prescribir precisamente que *“Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”*.

Este es un tema que, por cierto, ha sido reconocido ya por la Excma. Corte Suprema en diversas sentencias dictadas por la materia (Rol N°8318-2018; Rol N°29944-2019; Rol N°29.617-2019; Rol N°79.259-2020, entre otras).

DECIMOSEXTO: Por tanto, en relación con la alegación formulada por la demandada en análisis, tanto en su fundamento principal como subsidiario, deberá ser rechazada al estimar que la acción indemnizatoria en este tipo de materias es imprescriptible atendidos los fundamentos esgrimidos precedentemente.

III-En cuanto al fondo:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

DECIMOSEPTIMO: Que la acción deducida por el actor en el folio 1 de estos antecedentes buscan resarcir el perjuicio moral que le han causado los agentes del Estado, reconocidos en el Informe de la Comisión Valech, habiendo sido sujeto a una detención entre octubre de 1973 y octubre de 1974, como asimismo en una fecha indeterminada de 1975, sumado a la aplicación de tormentos y tratos vejatorios, reclamando resarcimiento de las consecuencias que de ello derivaron en su esfera personal.

DECIMOCTAVO: Que es un hecho de la causa que la parte demandada no ha controvertido la ocurrencia de los hechos denunciados, ni su connotación ni el contexto en que se promovieron aquellos, máxime si han sido considerados los actores conforme al registro del Informe Valech que los sitúa en el listado de víctimas de prisión y tortura, tal como aparece en el documento asociado a dicho informe, en el folio 37, no objetado de contrario. Lo anterior se colige sólo por la afirmación del actor y el hecho que figure en la lista de las víctimas de la prisión política y tortura, junto con no controvertir mayormente lo expuesto de acuerdo a la defensa de la demandada.

Sin embargo, la demandada hace presente que el daño moral pretendido a base de esos hechos no se cuantifica a partir de un aspecto económico en particular, por lo que entiende que lo solicitado es excesivo, teniendo en consideración todas las acciones que el Estado ha llevado a cabo a fin de obtener la aludida indemnización y, en subsidio de esa alegación, la regulación debe considerar los pagos ya recibidos y efectuados por el Estado, en armonía con los montos establecidos por los tribunales, los que ha recibido el actor durante años y que seguirá percibiendo con posterioridad.

DECIMONOVENO: En esta materia, junto con reiterar las normas citadas con anterioridad respecto al derecho de reparación integral que contempla el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2314 del Código Civil señala que *“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”*, a lo que el artículo 2329 del mismo cuerpo legal, en su inciso primero, dispone que *“Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”*.

Se ha reconocido que, dentro de la clasificación del daño, atendida su naturaleza, se encuentra el llamado daño moral, que contempla la aflicción, el daño en los sentimientos e integridad espiritual de una persona, que no forman



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

parte del aspecto patrimonial propiamente tal, y que de alguna forma se busca resarcir mediante la indemnización de perjuicios requerida.

Como perjuicio que es, debe ser probado precisamente por quien lo alega, conforme al artículo 1698 del Código Civil.

VIGÉSIMO: Para su acreditación, el demandante acompañó los documentos descritos en los folios 37 y 38, no objetados.

Se trata de documentos que son genéricos, los que, de su lectura, reflejan los efectos emocionales y psicológicos que la actuación de los organismos estatales en la violación de derechos humanos en contexto político han causado no solamente en las personas que directamente lo sufrieron sino también en sus familias y proyectos de vida, los que permiten entender que el efecto causado en la persona del demandante es similar a los descritos en dichos antecedentes, a saber: sensación de miedo, pérdida de proyectos de vida; efectos existenciales, desintegración familiar, desinterés por el mundo exterior, entre otras afecciones.

VIGESIMO PRIMERO: Así las cosas, este sentenciador estima, de acuerdo a lo señalado en el considerando anterior, que el actor ha acreditado que la detención sufrida por este entre octubre de 1973 y octubre de 1974, y en una fecha indeterminada de 1975, le ocasionó perjuicio moral pues afectó su dimensión espiritual.

Si bien es dable presumir que una consecuencia lógica de una experiencia traumática como la que el actor explicado en su demanda consiste precisamente en un daño moral de tal entidad que provocó de manera indiscutible un cambio en el desarrollo personal y que permanece en su espiritualidad hasta el día de hoy, como todo perjuicio se requiere prueba para sostener, con precisión, la forma en que ese daño moral no solamente existe, sino que también cómo se ha manifestado o repercutido en el afectado, esto es, su intensidad, de tal manera que ello influirá en el quantum indemnizatorio a fijar.

En este apartado, este sentenciador sostiene que, sin perjuicio que no se discutió la forma como ocurrieron los hechos y que, por otro lado, al ser reconocido como víctima de actuaciones del Estado contra los derechos humanos, se entiende el perjuicio causado al actor, existen dificultades para acceder a la pretensión indemnizatoria en la forma solicitada, pues si bien se acompañan antecedentes que permiten desprender genéricamente los efectos que dichos actos provocaron en ellos, no se cuenta con antecedentes que permitan atender la concreta situación del actor.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

Resulta de suyo complejo determinar su *quantum*, pues de los propios dichos del actor, se sostienen sus consecuencias, pero no hay precisión en la intensidad, o qué forma en particular le afectaron, más allá de entender que la privación de libertad sufrida y en las condiciones en que se produjeron es, por sí misma, un daño causado a su persona. En otras palabras, resulta difícil conocer cómo fueron sus efectos, repercusiones en su proyección de vida, efectos inmediatos ocasionados por ella; cómo alteró su entorno familiar, entre otros aspectos.

Por tanto, el parámetro que tiene este juez para acceder a la acción deducida es muy complejo y que impide acoger la acción en la forma solicitada sin perjuicio de lo que se dirá a continuación.

VIGÉSIMO SEGUNDO: De acuerdo al razonamiento anterior, este sentenciador estima, dada la magnitud de los hechos sufridos por el actor y las secuelas probables y genéricas adquiridas a consecuencia del ilícito cometido en su contra, que deberá regularse el daño moral acreditado en una suma de \$18.000.000.- (dieciocho millones de pesos), por lo que no se accederá a la petición en la forma solicitada en la demanda respecto al monto solicitado considerando la ponderación prudencial que este sentenciador realiza tomando en cuenta lo probado en autos a base de los antecedentes proporcionados.

VIGÉSIMO TERCERO: Respecto a la alegación de la demandada a fin de considerar los beneficios que el actor actualmente reciben y que fueron acreditados en autos en el folio 34 para los efectos de fijar la indemnización que se concede, se rechazará por los mismos motivos consignados al desechar la excepción de reparación integral, en circunstancias que su argumento plantea, en cierto modo, el mismo efecto que se tuvo en consideración al esgrimir que la parte demandante habría sido resarcida de los perjuicios sufridos con las prestaciones legales concedidas en su favor y que actualmente percibe.

VIGÉSIMO CUARTO: En cuanto al reajuste e interés solicitado, será acogido sólo en cuanto se concederá el aludido reajuste de la suma fijada a título de indemnización conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a aquel en que quede ejecutoriada esta sentencia hasta el mes anterior al del pago efectivo y, a su vez, generará intereses corrientes, todo ello contado desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada hasta su pago efectivo.

VIGÉSIMO QUINTO: En cuanto a la condena en costas solicitada, no se accederá a la imposición de dicha carga procesal en circunstancias que la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

demandada no fue totalmente vencida y que, en todo caso, estima que ha litigado con fundamento plausible en el proceso.

VIGESIMO SEXTO: Finalmente, el resto de la prueba acompañada al proceso por los actores en los folios 37 y 38 que no fueron analizados mayormente en el considerando quinto de este fallo, no gozan del mérito suficiente como para alterar lo resuelto precedentemente, al tratarse de aspectos genéricos que permiten contextualizar los efectos ocasionados en las personas que sufrieron tratos vejatorios, detenciones ilegales y torturas entre 1973 y 1990, por lo que no precisan los perjuicios específicos sufridos por el actor según lo expuesto precedentemente.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1698, 2314, 2329, 2332 y 2514, todos ellos del Código Civil, 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 27 de la Convención de Ginebra sobre Derecho de Los Tratados y 170 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:.

I-**Se rechaza** la excepción de reparación integral alegada por la demandada.

II-**Se rechaza** la excepción de prescripción extintiva conforme a los fundamentos contenidos en los considerandos undécimo a decimosexto de esta sentencia.

III-**Se acoge** la demanda interpuesta en el folio 1 de estos antecedentes, sólo en cuanto condena a la parte demandada al pago de una suma de **\$18.000.000.- (dieciocho millones de pesos)** a título de daño moral en favor del demandante Gerardo del Tránsito Valenzuela Valenzuela.

Dicha suma deberá pagarse debidamente reajustada y con los intereses respectivos de acuerdo a lo señalado en el considerando vigésimo cuarto de esta sentencia.

IV-**Que no se condena** en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida y por haber litigado con motivo plausible.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por don Gastón Villagra Santander, juez titular del Décimo Juzgado Civil de Santiago.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK

«RIT»

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintitrés de Enero de dos mil veintitrés**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RKJXXDVFXEK